

Nota explicativa que acompaña a la propuesta de revisión de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020¹

La Comisión publica para consulta una propuesta de revisión de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (**Directrices EEAG**). Se invita a los ciudadanos y a las partes interesadas a que expresen sus puntos de vista sobre esta propuesta y sobre cómo contribuirán las Directrices revisadas a la consecución de los objetivos del Pacto Verde de la UE de neutralidad en carbono, uso eficiente de la energía y los recursos y circularidad, reducción de la contaminación y biodiversidad de una manera rentable, limitando al mismo tiempo los posibles falseamientos de la competencia. La consulta pública durará ocho semanas. Además, como ya se anunció en la evaluación inicial de impacto, se celebrará una reunión con los Estados miembros para recabar sus opiniones sobre el proyecto de Directrices presentado para consulta. La información recabada mediante esta consulta pública se incorporará a la evaluación de impacto, en la que se basará la revisión.

En noviembre de 2020, la Comisión publicó una evaluación inicial de impacto para informar a los ciudadanos y a las partes interesadas de la iniciativa de revisar las Directrices EEAG e inició una consulta pública abierta sobre la base de un cuestionario, con el fin de recabar las impresiones de las partes interesadas e integrarlas en la revisión. Al mismo tiempo, la DG Competencia lanzó una convocatoria de contribuciones a escala europea para debatir cómo puede apoyar mejor la política de competencia de la UE el Pacto Verde. A esto siguió una conferencia el 4 de febrero de 2021, convocada por Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva, en la que se reunieron las diferentes perspectivas sobre este importante tema que también han alimentado esta revisión.

El objetivo de la presente nota es aclarar el objetivo y el alcance de la propuesta de revisión. La presente nota acompaña a la consulta pública sobre la propuesta de Directrices sobre ayudas estatales en favor del clima, la protección del medio ambiente y la energía 2022 (**Directrices CEEAG**).

1. Contexto

La Comisión ha situado el Pacto Verde Europeo como máxima prioridad, con el objetivo de transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Las ambiciones climáticas de la Comisión se reforzaron en 2019 con la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo², que establece el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Con el fin de situar a la UE en una senda responsable para llegar a ser climáticamente neutra para 2050, la Comisión también ha propuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030³. Estos ambiciosos objetivos se han consagrado en el texto propuesto de la Ley del Clima.

La consecución de los objetivos de neutralidad en carbono, uso eficiente de la energía y los recursos y circularidad, reducción de la contaminación, biodiversidad y acompañamiento de la transición ecológica requerirán importantes esfuerzos y un apoyo específico. Para alcanzar las ambiciones del

¹ DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.

² Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «El Pacto Verde Europeo», de 11 de diciembre de 2019 [COM(2019) 640 final].

³ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos, 17 de septiembre de 2020, [COM(2020) 562 final].

Pacto Verde, será necesaria una inversión significativa, y más inversión también en fuentes de energía renovable. La Comisión ha estimado que alcanzar los nuevos objetivos en materia de clima y energía para 2030 requerirá 350 000 millones de euros de inversión anual adicional. La magnitud de este reto de inversión exige movilizar tanto el sector privado como fondos públicos de manera eficiente. Esto afectará a todos los sectores y, por consiguiente, a la economía en su conjunto.

Las normas sobre ayudas estatales desempeñarán un papel importante a la hora de cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Mecanismo para una Transición Justa. La Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo establece específicamente que las normas sobre ayudas estatales deben ser revisadas con el fin de reflejar los objetivos políticos, apoyar una transición eficiente hacia la neutralidad climática y facilitar la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles, especialmente los más contaminantes, al tiempo que garanticen condiciones de competencia equitativas en el mercado interior.

Las actuales Directrices EEAG, que datan de 2014, expirarán el 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, el objetivo es que las nuevas Directrices entren en vigor a principios de 2022.

En 2019, la Comisión llevó a cabo un control de adecuación del paquete sobre la modernización de las ayudas estatales, que se publicó el 30 de octubre de 2020⁴.

Los resultados mostraron que las Directrices EEAG y las normas del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) relativas a la protección del medio ambiente y la energía han logrado, en general, apoyar los objetivos climáticos, pero que algunos aspectos deben simplificarse y modernizarse de manera que se minimicen los falseamientos de los intercambios y la competencia. Además, el Pacto Verde Europeo requiere una revisión más amplia y profunda de las Directrices EEAG para estar plenamente a la altura del reto que supone el Pacto Verde.

La revisión de las Directrices se basa en la evaluación y en diversas fuentes de pruebas y datos, entre otras la casuística, un estudio externo y las aportaciones de las partes interesadas. La Comisión ha recabado opiniones mediante una consulta pública abierta efectuada en 2020, que se completará con las observaciones recibidas de la presente consulta pública.

Al mismo tiempo, el RGEC también está siendo objeto de una revisión parcial de las disposiciones correspondientes que complementan las disposiciones establecidas en estas Directrices. Está previsto que en el verano de 2021 se celebre una consulta pública sobre la propuesta de dichas disposiciones revisadas.

2. Justificación de la revisión

La revisión consta de dos bloques principales:

- una ampliación del ámbito de aplicación de las Directrices a nuevos ámbitos (como la movilidad limpia o la biodiversidad) y a todas las tecnologías que pueden materializar el Pacto Verde, permitiendo importes de ayuda más elevados (100 % del déficit de financiación) y nuevos instrumentos de ayuda (por ejemplo, contratos de carbono por diferencias);
- la flexibilización de las normas de compatibilidad con una evaluación simplificada de medidas transversales y, en general, sin notificaciones individuales para grandes proyectos ecológicos dentro de regímenes aprobados.

⁴ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance>

Este ámbito de aplicación ampliado de las Directrices debe ir acompañado de salvaguardias para garantizar que la ayuda se destine efectivamente allí donde sea necesaria para mejorar la protección del medio ambiente, se limite a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no falsee la competencia ni la integridad del mercado interior. Esta revisión también tiene por objeto garantizar la armonización y la coherencia con la legislación y las políticas pertinentes de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la energía.

En cuanto a la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles, las Directrices propuestas explican que, como regla general, es poco probable que las medidas que impliquen apoyo a los combustibles fósiles más contaminantes generen efectos medioambientales positivos y suelen tener importantes efectos negativos, ya que pueden aumentar las externalidades medioambientales negativas en el mercado. Lo mismo ocurre con las medidas que impliquen nuevas inversiones en gas natural, a menos que se demuestre que las inversiones son compatibles con los objetivos de la Unión, en materia de clima para 2030 y de neutralidad climática para 2050. Por tanto, en las Directrices propuestas hemos indicado que es poco probable que, en el caso de tales medidas, la conclusión de la prueba de sopesamiento sea positiva (y, por consiguiente, es poco probable que la ayuda estatal sea posible).

Por lo que se refiere a la revisión de las disposiciones pertinentes del RGEC, el objetivo es facilitar aún más las inversiones ecológicas, ampliando el ámbito de aplicación a ámbitos emblemáticos como las infraestructuras de movilidad limpia y la biodiversidad y revisando las disposiciones sobre eficiencia energética de los edificios y sobre uso eficiente de los recursos para hacerlas más operativas. Además, se flexibilizarán las normas en lo que respecta a la definición de los costes subvencionables y de las intensidades de ayuda.

Las siguientes secciones ofrecen una visión general de los principales cambios que está contemplando la Comisión en esta fase de la revisión. El texto del proyecto de Directrices propuesto para consulta no es definitivo y volverá a evaluarse a la vista de los comentarios y las pruebas recibidos en la presente consulta pública.

3. Ayudas para la reducción y eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el apoyo a las energías renovables

Para facilitar en la mayor medida posible la consecución de los objetivos climáticos de la Unión, el ámbito de aplicación de las Directrices propuestas se amplía a todas las tecnologías que reducen los gases de efecto invernadero y mejoran la eficiencia energética. Esta sección de las Directrices evita deliberadamente mencionar tecnologías específicas, ya que la intención es permitir todas las tecnologías y enfoques que puedan contribuir y garantizar que las Directrices respondan lo mejor posible al futuro. No obstante, el apoyo a las energías renovables estaría totalmente cubierto por esa sección, y siguen siendo posibles regímenes renovables específicos dentro de las normas para garantizar que los Estados miembros cuenten con los instrumentos necesarios para apoyar la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energía renovable.

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar la eficiencia energética, se podrán conceder ayudas para la totalidad de los costes adicionales netos de las inversiones y actividades más respetuosas con el medio ambiente, y serán posibles ayudas en diversas formas, incluidos los contratos por diferencias, supeditadas a normas que garanticen que no se falsee indebidamente la formación de los precios de mercado.

Para aumentar la transparencia y garantizar que la flexibilidad adicional esté bien calibrada e incentivar la participación de las partes interesadas en el diseño de las medidas de apoyo, las Directrices CEEAG introducen el requisito de realizar una consulta pública sobre las principales características del régimen previsto en determinadas circunstancias.

Para garantizar que la ayuda es necesaria y disuadir de ayudas para inversiones menos rentables en términos de descarbonización, los Estados miembros tendrán que indicar claramente el coste de todos los tipos de proyectos subvencionados para la protección del clima en términos de importe de ayuda por unidad de reducción de gases de efecto invernadero conseguida (EUR/tCO₂ equivalente reducido). No obstante, no será obligatorio utilizar este parámetro como base para seleccionar los proyectos que vayan a recibir ayuda.

Para reducir la compensación excesiva y el falseamiento del mercado, la licitación es el mecanismo por defecto para conceder la ayuda y fijar el nivel de ayuda. Salvo que esté justificado, las ofertas deben estar abiertas, en la medida de lo posible, a tecnologías competidoras en el Estado miembro que puedan alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Comisión agradecería también específicamente observaciones sobre la inclusión de ayudas para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero del medio ambiente en el ámbito de aplicación de las Directrices. Las tecnologías que permiten eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero del aire ambiente pueden contribuir a lograr los objetivos de la UE, pero no deben inducir a disminuir el esfuerzo por agotar cualquier otro medio disponible para evitar o reducir las emisiones. Por otra parte, hay casos de inversiones privadas no subvencionadas para eliminar los gases de efecto invernadero, lo que indica que la ayuda puede no siempre ser necesaria. Las observaciones serán una base importante para tomar una decisión informada, tanto si el ámbito de aplicación de las Directrices incluye la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero del medio ambiente como si no.

4. Otras ayudas de carácter medioambiental

4.1. Ayudas para la mejora del rendimiento energético y medioambiental de edificios

Para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de al menos un 55 % para 2030, la UE debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios en un 60 %. La Comunicación de la Comisión sobre la Oleada de renovación para Europa⁵ establece el objetivo de duplicar al menos las tasas de renovación en los próximos diez años y garantizar que las renovaciones produzcan mayor eficiencia energética y de los recursos.

Para facilitar renovaciones en profundidad, los Estados miembros podrán combinar la ayuda para la mejora de la eficiencia energética de los edificios con ayudas para cualquier inversión que mejore su rendimiento energético y medioambiental, como infraestructuras *in situ* para la generación y almacenamiento de energía renovable, puntos de carga para vehículos eléctricos y equipos de digitalización.

Para garantizar que la ayuda suponga una mejora real de la eficiencia energética, será necesario un nivel mínimo de ahorro energético. Las medidas de ayuda que generen un ahorro energético significativo podrán optar a una prima ecológica.

Las Directrices propuestas incluyen normas específicas sobre la ayuda a las empresas de servicios energéticos para facilitar los contratos de rendimiento energético.

⁵ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas, de 14 de octubre de 2020, COM(2020) 662 final.

4.2. Ayudas para la movilidad limpia

Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, el Pacto Verde Europeo estableció la necesidad de reducir las emisiones ocasionadas por el sector del transporte en un 90 %. La Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de movilidad sostenible e inteligente⁶ confirma las aspiraciones del Pacto Verde Europeo y establece diversos hitos que indiquen al sector el camino hacia el logro de este objetivo⁷.

Para facilitar la transición hacia una movilidad limpia, con arreglo a las Directrices propuestas será posible apoyar la adquisición de vehículos de transporte limpios (utilizados para el transporte de pasajeros y mercancías aéreo, por carretera, ferroviario, por vías navegables interiores, marítimo y costero), incluidos los vehículos que funcionan con gas natural cuando constituyan una tecnología de transición necesaria hacia una movilidad de cero emisiones, o la adaptación de vehículos de transporte. Además, se ampliará el ámbito de aplicación de las Directrices para que los Estados miembros puedan apoyar la implantación de infraestructuras de recarga o repostaje de acceso público necesarias para el funcionamiento de vehículos limpios, sin excluir las inversiones privadas en este sector.

Como norma general, la ayuda se concederá mediante procedimientos de licitación con el fin de garantizar que se limite al mínimo necesario. Por lo que se refiere a la ayuda a los vehículos limpios, las Directrices CEEAG proporcionarán flexibilidad a los Estados miembros para determinar la forma de ayuda más adecuada y permitirán cubrir íntegramente el coste adicional de propiedad. Por lo que se refiere a las infraestructuras de recarga y repostaje, los Estados miembros podrán financiar proyectos hasta la totalidad del déficit de financiación.

4.3. Ayudas para el uso eficiente de los recursos y para apoyar la transición hacia una economía circular

El Plan de acción para la economía circular⁸, cuyo objetivo es acelerar la transición de la UE a una economía circular como parte del cambio transformador promovido por el Pacto Verde Europeo, ha pedido específicamente que se reflejen los objetivos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos en el contexto de la revisión de las Directrices.

Las Directrices incluirán una nueva sección sobre eficiencia en el uso de los recursos y circularidad que abarcará las ayudas para inversiones que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos y para la prevención, preparación para la reutilización o reciclado y reciclado de residuos u otros productos, materiales o sustancias.

El cálculo de los costes subvencionables se basará en la identificación de una hipótesis de contraste para garantizar que la ayuda se limite a la compensación de los costes medioambientales. Se propone un método de cálculo alternativo para los casos en que no pueda establecerse una hipótesis de contraste. La intensidad máxima de la ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, con bonificaciones para las pymes, para las inversiones situadas en zonas asistidas y para proyectos de ecoinnovación. La ayuda también podrá concederse mediante un procedimiento de licitación pública.

⁶ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro, 9 de diciembre de 2020, COM(2020) 789 final.

⁷ Entre otras aspiraciones, la de que haya por lo menos 30 millones de automóviles de emisión cero y 80 000 camiones de emisión cero en circulación para 2030 y que para 2050 prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados sean de emisión cero.

⁸ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva», 11 de marzo de 2020, [COM(2020) 98 final].

Las ayudas para los costes de funcionamiento solo podrán autorizarse con carácter transitorio para la recogida separada y la clasificación de residuos u otros productos, materiales o sustancias en relación con flujos de residuos o tipos de residuos específicos, con vistas a su preparación para la reutilización o el reciclado.

4.4. Otras ayudas de carácter medioambiental

Reducción de la contaminación

Una nueva sección cubrirá las ayudas para evitar o reducir la contaminación y las emisiones distintas de los gases de efecto invernadero (por ejemplo, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ruido, fosfatos, etc.).

Para garantizar que la ayuda se destine a inversiones que tengan un impacto positivo en la reducción de la contaminación, los Estados miembros deberán cuantificar los beneficios medioambientales de sus medidas. Para simplificar el cálculo de los costes subvencionables, las Directrices propuestas prevén normas de proporcionalidad alternativas en caso de que no pueda establecerse una hipótesis de contraste. La intensidad máxima de la ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, con bonificaciones para las pymes y para las inversiones situadas en zonas asistidas. La ayuda también podrá concederse mediante un procedimiento de licitación pública.

Se aplicarán normas específicas a las ayudas en forma de permisos negociables.

Recuperación y biodiversidad

El ámbito de aplicación de las Directrices propuestas se amplía para abarcar no solo las ayudas a la descontaminación, sino también las ayudas para la recuperación de la naturaleza y los ecosistemas, así como para la protección y recuperación de la biodiversidad.

Las Directrices propuestas permiten a los Estados miembros cubrir hasta la diferencia entre el 100 % de los costes del proyecto de descontaminación, rehabilitación o biodiversidad y el aumento del valor del lugar resultante de la descontaminación o rehabilitación. De conformidad con el principio de «quien contamina paga», no pueden concederse ayudas a la entidad responsable de prevenir y corregir la degradación y la contaminación del medio ambiente, excepto cuando sea necesario para aumentar el alcance o la ambición del proyecto de descontaminación o rehabilitación más allá de sus obligaciones legales.

Reducciones fiscales

Habida cuenta de la autonomía fiscal de los Estados miembros y con el fin de ofrecerles flexibilidad a la hora de diseñar una medida en forma de reducciones fiscales, las Directrices propuestas incluyen una sección específica en la que se establecen criterios de compatibilidad específicos (es decir, simplificados, en particular la exención del requisito de licitación). Esta sección se divide en dos subsecciones: i) reducciones de impuestos o exacciones medioambientales, que son necesarias para determinados sectores con un uso intensivo de recursos (continuación de las disposiciones vigentes contenidas en la sección 3.7.1 de las Directrices de medio ambiente de 2014); ii) reducción de impuestos y/o cargas parafiscales cuyo objetivo principal sea la protección del medio ambiente, es decir, incentivar a los beneficiarios para que emprendan proyectos o actividades que den lugar a una menor contaminación o consumo de recursos.

La ayuda no debe superar el tipo normal o el importe del impuesto o carga que, de otro modo, sería aplicable. Dependiendo de si la ayuda se refiere a la inversión o es una ayuda de funcionamiento, se aplican otras salvaguardias específicas.

5. Ayudas en el sector de la energía

5.1. Ayudas para la seguridad del suministro de electricidad

Las Directrices propuestas preservan en gran medida las normas de las Directrices EEAG de 2014, incorporando los principales aspectos de la legislación sectorial y codificando la casuística desde 2014, en particular aclarando que las Directrices se aplican también a las medidas de congestión e interrumpibilidad de la red.

Las Directrices propuestas permitirán a los Estados miembros hacer que sus medidas de seguridad del suministro sean más ecológicas (por ejemplo, estableciendo umbrales nacionales de emisiones estrictos o incorporando otros criterios medioambientales a sus medidas de seguridad del suministro).

Para aumentar la transparencia e incentivar la participación de las partes interesadas en el diseño de estas complejas medidas de apoyo, se introducirá la obligación de consulta pública en determinadas circunstancias.

5.2. Ayudas para infraestructuras energéticas

Las normas sobre ayudas estatales para infraestructuras energéticas operan en un contexto en el que muchos proyectos, en particular los de mayor envergadura, están cofinanciados por Fondos Estructurales de la UE. Además, se prevé designar una cantidad significativa de gasto del Fondo de Recuperación y Resiliencia en el marco de la iniciativa emblemática «Activación» para proyectos de infraestructura específicos. Las Directrices propuestas reiteran claramente que las cuestiones relativas a las ayudas estatales solo se plantean cuando la infraestructura se explota fuera de los monopolios naturales y legales de los operadores de red.

El ámbito de aplicación de las Directrices propuestas también se ampliaría a las nuevas categorías de infraestructuras que han adquirido más relevancia desde la introducción de las actuales Directrices EEAG, como los gasoductos reservados para hidrógeno y gases renovables, así como otras categorías de infraestructuras nuevas que puedan surgir en los próximos años. Las inversiones en estas nuevas categorías de infraestructuras también se evaluarían con arreglo a los principios generales de evaluación por lo que se refiere a la proporcionalidad y la prevención del falseamiento de la competencia.

Por último, para evitar el efecto de cautividad de las infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles, se introducirán salvaguardias adicionales para el apoyo a las inversiones en infraestructuras de gas natural (es decir, terminales de GNL), por ejemplo, exigiendo que la infraestructura de gas esté preparada para el hidrógeno o no cree un efecto de cautividad. Las infraestructuras para otras formas de combustibles fósiles (en particular, el petróleo) no se incluirían en las Directrices propuestas.

5.3. Ayudas para calefacción y refrigeración urbanas

En el caso de la calefacción y refrigeración urbanas, se mantendrán las simplificaciones introducidas en virtud de la Comunicación SEIP⁹ y del modelo RRF¹⁰. Las siguientes normas: a) abrir la posibilidad de evaluar la proporcionalidad de la ayuda a la red y a la fuente de calor en relación con el déficit de financiación (es decir, sin tener en cuenta las intensidades de ayuda anteriores) y b) aclarar que, cuando la inversión de mejora todavía no alcanza el nivel de eficiencia energética, la ayuda

⁹ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible. Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo», de 14 de enero de 2020 [COM(2020) 21 final].

¹⁰ https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf

puede aprobarse a condición de que se realice otra mejora para alcanzar la eficiencia energética en un plazo de tres años.

También en este caso, se introducirán salvaguardias adicionales contra el efecto de cautividad en los proyectos de calefacción urbana que impliquen el uso de combustibles fósiles. Siguiendo el enfoque general descrito en la sección 2, las Directrices propuestas explican que es poco probable que se pueda apoyar la nueva generación de calor a partir de los combustibles fósiles más contaminantes, dada la ausencia de efectos medioambientales positivos y los efectos negativos adicionales de dicho apoyo. Sin embargo, podría haber efectos positivos en el apoyo a la mejora de las redes de transporte de calor en torno a las centrales de generación basadas en combustibles fósiles, siempre que ello no dé lugar a un incremento de la generación de energía a partir de combustibles fósiles (por ejemplo, al conectar clientes adicionales).

En cuanto al apoyo a los proyectos de generación de calefacción urbana con gas, los Estados miembros deben explicar cómo garantizarán que la inversión sea coherente con la estrategia global para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050.

5.4. Ayudas al cierre del carbón, la turba y el esquisto bituminoso

El abandono de la generación de electricidad a partir del carbón, la turba y el esquisto bituminoso es uno de los motores más importantes de la descarbonización del sector eléctrico de la Unión. Las Directrices propuestas incluirán normas de compatibilidad para dos tipos de medidas de apoyo que pueden adoptar los Estados miembros para apoyar el cierre de centrales que funcionan con carbón (tanto antracita y hulla como lignito), turba o esquisto bituminoso y potencialmente también de las actividades mineras para la extracción de estos combustibles (conjuntamente denominadas, «actividades relacionadas con la antracita, hulla, turba y esquisto»).

Una primera subsección se refiere a las ayudas concedidas por los Estados miembros para compensar el cierre anticipado de las actividades rentables relacionadas con la antracita, la hulla, la turba y el esquisto bituminoso, en particular por el lucro cesante. En la medida de lo posible, el importe de la ayuda se definirá mediante procedimientos de licitación pública. Para garantizar que se ejecutarán los proyectos más eficaces, también será necesario cuantificar el beneficio medioambiental.

Una segunda subsección se refiere a las ayudas concedidas por los Estados miembros para cubrir costes sociales y medioambientales excepcionales derivados del cierre de actividades no competitivas relacionadas con la antracita, la hulla, la turba y el esquisto bituminoso. Las categorías de costes subvencionables cubiertas se definen en las Directrices propuestas. No serán subvencionables los costes derivados del incumplimiento de la normativa medioambiental y los costes relacionados con la producción corriente.

6. Ayudas en forma de reducciones de las exacciones sobre la electricidad a los grandes consumidores de energía

La transformación de la economía de la UE en consonancia con el Pacto Verde Europeo se financia parcialmente mediante exacciones sobre el consumo de electricidad. A este respecto, es probable que los Estados miembros sigan financiando estas políticas mediante exacciones, por lo que es posible que dichas exacciones aumenten. Algunos sectores particularmente expuestos al comercio internacional y que dependen en gran medida de la electricidad para su creación de valor pueden verse ante una onerosa carga financiera a la hora de pagar tales exacciones. Por esa razón, las Directrices EEAG han permitido a los Estados miembros introducir reducciones selectivas en el pago de estas exacciones. Las Directrices propuestas seguirán permitiendo reducciones de las exacciones para corregir el incremento del riesgo de que las actividades de los sectores subvencionables se trasladen fuera de la Unión Europea a otros lugares en los que no exista disciplina medioambiental o esta sea menos estricta. La Comisión ha señalado estos sectores y ha introducido requisitos de proporcionalidad que

tengan en cuenta que, si las reducciones son demasiado elevadas o se otorgan a demasiados consumidores de electricidad, la financiación global del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables podría verse amenazada y los falseamientos de la competencia y los intercambios podrían ser particularmente altos.

La admisibilidad se determina sobre la base de los umbrales de intensidad de consumo eléctrico e intensidad del comercio a nivel sectorial. Los sectores serán subvencionables si tienen una intensidad comercial de al menos el 20 % a escala de la Unión y una intensidad de uso de la electricidad mínima del 10 % a escala de la Unión. Además, la Comisión considera que existe un riesgo análogo en otros sectores que tienen una intensidad de uso de la electricidad mínima del 7 % y una intensidad comercial de al menos el 80 %. Una intensidad comercial del 20 % es coherente con las metodologías utilizadas para elaborar la lista de riesgo de fuga de carbono con arreglo al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE¹¹ y la lista de aquellos sectores que se consideran expuestos a un verdadero riesgo de fuga de carbono debido a los costes de emisiones indirectas con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales del RCDE¹². Por otra parte, la Comisión considera que las exacciones en cuestión solo provocan un riesgo significativo de que las actividades de los sectores subvencionables se trasladen fuera de la Unión Europea cuando el nivel global acumulativo de la mismas (antes de cualquier reducción) alcanza un nivel mínimo de costes por MWh.

A fin de tener en cuenta la mayor ambición del Pacto Verde y codificar la casuística decisoria actual de la Comisión, el alcance de las reducciones se hará extensivo a todas las exacciones sociales y de descarbonización. La desventaja competitiva para los grandes consumidores de energía se considera especialmente presente si las exacciones sobre la electricidad alcanzan un determinado umbral mínimo. Las exacciones reducidas se considerarán proporcionadas si las empresas pagan al menos el 25 % de las exacciones correspondientes; sin embargo, también existiría la posibilidad de limitar la contribución propia de las empresas al 1,5 % de su valor añadido bruto. También se propone adaptar parcialmente las disposiciones sobre reducciones para los grandes consumidores de energía a las Directrices del RCDE, incluida la introducción de condiciones ecológicas.

La Comisión agradecería especialmente recibir observaciones con respecto a: i) si la metodología mencionada es adecuada para detectar qué sectores están especialmente expuestos al riesgo de trasladarse fuera de la Unión Europea, al tiempo que mitigan los riesgos constatados anteriormente en cuanto al falseamiento de la competencia y los intercambios y la falta de financiación suficiente para apoyar a la energía procedente de fuentes renovables y ii) cuál debería ser el nivel acumulativo mínimo por MWh de las exacciones en cuestión necesario para autorizar las reducciones.

¹¹ Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la determinación de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el período 2021-2030.

¹² Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021, 21 de septiembre de 2020, C(2020) 6400 final.